

JUZGADO DIECISIETE DE FAMILIA DE BOGOTÁ

Diecisiete (17) de enero de dos mil veinticuatro (2024)

PROCESO	Acción de Tutela
RADICACIÓN	11001311001720230098300
Accionante	Iván Adolfo Santos Gutiérrez
Accionado	Ministerio de Defensa

ASUNTO A DECIDIR

De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el Decreto 2591 de 1991, procede el despacho a emitir decisión de fondo dentro de la acción de tutela instaurada a través de apoderado judicial por el ciudadano IVÁN ADOLFO SANTOS GUTIÉRREZ identificado con C.C. No. 80.418.461, en contra del MINISTERIO DE DEFENSA, por la presunta vulneración de su derecho fundamental de derecho de petición y acceso a la administración de justicia.

ANTECEDENTES

Los que a continuación se resumen por el despacho, así:

Informa el accionante que, como apoderado de los señores CAMILO ANTONIO ROMERO LOZANO, ELI JOHANNA ROMERO PEÑA y GLADYS MARÍA PEÑA BANQUET, y de la menor LUISA FERNANDA ROMERO PAYARES, quienes me confirieron poderes especiales para hacerlo, suscribió, en su calidad de CEDENTE, contrato de cesión de los créditos y derechos contenidos en la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 3 de marzo de 2023 dentro del proceso contencioso administrativo - medio de control de Reparación Directa, tramitado bajo el radicado 11001334305820170018201, en favor del CESIONARIO, señor IVAN ADOLFO SANTOS GUTIERREZ.

Informa que el señor IVAN ADOLFO SANTOS GUTIERREZ, en su condición de CECIONARIO, radicó el 20 de noviembre de 2023 ante el Ministerio de Defensa Derecho de Petición con todos sus anexos, solicitando le sea reconocida legalmente su condición de CECIONARIO sobre los créditos y todos los derechos contenidos en la sentencia mencionada, precisando, que, en virtud del contrato de cesión celebrado, el CEDENTE no está facultado para recibir el pago de los derechos económicos contenidos en la sentencia cedida.

Manifiesta que la entidad accionada a la fecha no ha dado oportuna respuesta al Derecho de Petición radicado el 20 de noviembre de 2023

Informa que con fecha 18 de octubre de 2023 la demandada le notificó que la solicitud de pago por mí radicada al Ministerio de Defensa en favor de

mis mandantes CAMILO ANTONIO ROMERO LOZANO, ELI JOHANNA ROMERO PEÑA, GLADYS MARÍA PEÑA BANQUET y LUISA FERNANDA ROMERO PAYARES, cumplía todos los requisitos legales para “expedir el acto administrativo de asignación de turno de pago”.

Indica que el retardo de la accionada para responder el derecho de petición mencionado es injustificado, por cuanto la respuesta solicitada no reviste de mayor grado de dificultad, consistiendo su resolución a verificar si la cesión de la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 3 de marzo de 2023 se hizo conforme a los requisitos legales, y comunicarlo así al CESIONARIO y al suscrito CEDENTE.

Informa que tiene interés jurídico en la resolución oportuna de la petición mencionada y a la fecha la accionada no le ha notificado respuesta alguna en relación al contrato de cesión de los derechos precitados.

DERECHOS PRESUNTAMENTE VULNERADOS

El accionante manifiesta que se le está vulnerando su derecho fundamental de petición y acceso a la administración de justicia.

PRETENSIONES

El accionante solicita tutelar su derecho petición y acceso a la administración de justicia, y ordenar que se conteste dentro de las 48 horas siguientes el derecho de petición radicado el 20 de noviembre de 2023, por el señor IVÁN ADOLFO SANTOS GUTIÉRREZ.

ACTUACIÓN PROCESAL

La presente acción de tutela fue radicada el 19 de diciembre de 2023, admitida mediante providencia de la misma fecha, y se ordenó notificar al MINISTERIO DE DEFENSA, con el objeto que se manifestara sobre cada uno de los hechos descritos en el libelo.

RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS Y/O VINCULADAS

El Coordinador del Grupo de Reconocimiento de Obligaciones Litigiosas del MINISTERIO DE DEFENSA, quien fue notificado de la presente acción constitucional el día 19 de diciembre de 2023 a través del correo electrónico, remitió su respuesta el 16 de enero de 2024 a las 10:08, en la que solicita que se nieguen las pretensiones de la acción por tornarse improcedente, teniendo en cuenta que no existe vulneración de derechos; por lo tanto, solicita se declare improcedente por la carencia actual de objeto por hecho superado.

CONSIDERACIONES

Competencia

Al tenor de lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1983 de 2017, este despacho es competente para conocer y decidir el trámite de la acción de tutela interpuesta, teniendo en cuenta que se invoca la protección de derechos fundamentales; asimismo, corresponde el reparto del asunto al Juez del Circuito cuando se trata de una entidad del orden nacional, como lo es el MINISTERIO DE DEFENSA

Procedencia de la acción de tutela

La solicitud de amparo constitucional ha sido presentada dentro de un término razonable ante el juez, y el accionante no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para proteger su derecho; por lo tanto, concluye esta sede judicial que la acción de tutela interpuesta es procedente, al cumplir los requisitos de subsidiariedad e inmediatez, y al haberse solicitado el amparo de una garantía fundamental, como previamente se ha indicado.

Sobre el derecho fundamental de petición

La Constitución Política, en su artículo 23 consagra que “toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.

Frente a las características esenciales del derecho de petición, ha sido abundante y reiterativa la jurisprudencia constitucional, que ha establecido que el núcleo esencial de este derecho reside en la resolución pronta y oportuna de la solicitud. En este sentido, la H. Corte Constitucional ha manifestado:

“(i) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión; (ii) el núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión; (iii) la petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible; (v) la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares; (vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho fundamental de petición pues su objeto es distinto.

Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición; (viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa; (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder; y (x) ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado.”

De los anteriores componentes jurisprudenciales cabe destacar que el derecho de petición exige, por parte de las autoridades competentes, una decisión de fondo a lo requerido por el ciudadano, lo cual implica la prohibición de respuestas evasivas o abstractas, sin querer decir con ello que la respuesta deba ser favorable. La respuesta de fondo implica un estudio sustentado del requerimiento del peticionario, acorde con las competencias de la autoridad frente a la que ha sido presentada la petición.

El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994.

En la sentencia T-1006 de 2001, la Corte adicionó dos reglas jurisprudenciales más:

“La Corte ha añadido posteriormente otros dos: primero, ha establecido de forma clara que la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la exonera del deber de responder; [3] y, segundo, ha precisado que ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado. [4]”

Como la pretensión de la accionante se circunscribe a la obtención de una respuesta de fondo por parte de la accionada respecto de su petición radicada en sus dependencias el 22 de junio de 2021 con radicado No. 2021-711-1403517-2 esta sede judicial ha de analizar si, en las condiciones que refiere el informativo, realmente se halla agraviado el derecho de petición del que es titular la accionante y sí a través de este medio resulta viable la protección en la forma peticionada.

Derecho fundamental al debido proceso

El debido proceso es una garantía fundamental consagrada en el artículo 29 de la Constitución Política, y en virtud de esta se impone a las autoridades judiciales y administrativas la obligación de proteger el derecho de defensa y contradicción del cual gozan las partes en cualquier actuación, y de respetar el curso y los términos de los procesos. Así lo ratifica la Corte Constitucional, al señalar:

“El derecho al debido proceso, como desarrollo del principio de legalidad y como pilar primordial del ejercicio de las funciones públicas, es un derecho fundamental que tiene por objeto la

preservación y efectiva realización de la justicia material. Este derecho ha sido ampliamente reconocido como un límite al ejercicio, in genere, de los poderes públicos; esto, pues tal y como lo preceptúa la Constitución Política, debe ser respetado indistintamente, tanto en las actuaciones administrativas, como en las de carácter jurisdiccional.

Adicionalmente, esta Corporación ha expuesto en forma reiterativa, que el derecho al debido proceso está conformado por un conjunto de garantías que tienden por el respeto y protección de los derechos de los individuos que se encuentran incurso en una determinada actuación de carácter judicial o administrativa; y en virtud de las cuales, las autoridades estatales cuentan con la obligación de ajustar su accionar conforme a los procedimientos contemplados para cada tipo de trámite.”¹

Sobre el concepto de hecho superado

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional se ha entendido por hecho superado la situación que se presenta cuando, durante el trámite de la acción de tutela, sobreviene la ocurrencia de hechos que demuestran que la vulneración de los derechos fundamentales, en principio informada a través de la instauración de la acción de tutela, ha cesado.

“...3.4.1. La jurisprudencia de esta Corporación, en reiteradas oportunidades, ha señalado que la carencia actual de objeto sobreviene cuando frente a la petición de amparo, la orden del juez de tutela no tendría efecto alguno o “caería en el vacío”[9]. Al respecto se ha establecido que esta figura procesal, por regla general, se presenta en aquellos casos en que tiene lugar un daño consumado o un hecho superado.

3.4.2. El hecho superado tiene ocurrencia cuando lo pretendido a través de la acción de tutela se satisface y desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados por el demandante, de suerte que la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso específico resultaría a todas luces inocua y, por lo tanto, contraria al objetivo de protección previsto para el amparo constitucional [10]. En este supuesto, no es perentorio incluir en el fallo un análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales cuya protección se demanda, salvo “si considera que la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, [ya sea] para llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera. De otro lado, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que la providencia judicial incluya la

¹ Sentencia T-115 de 2018.

demostración de la reparación del derecho antes del momento del fallo. Esto es, que se demuestre el hecho superado”[11]².

Del caso concreto

El asunto analizado atiende la situación de IVAN ADOLFO SANTOS GUTIERREZ, quien a través de apoderado judicial impetró acción de tutela en contra del MINISTERIO DE DEFENSA.

El accionante solicita el amparo al derecho fundamental de petición en atención a la omisión de respuesta de la petición radicada ante el MINISTERIO DE DEFENSA, teniendo en cuenta que esta no ha remitido la respuesta a lo solicitado el 20 de noviembre de 2023.

En el asunto objeto de pronunciamiento, existe certeza de acuerdo con las documentales allegadas al cuaderno tutelar por parte del accionante (numeral 07 del expediente) que durante el trámite de la acción tuitiva de derechos fundamentales, cesó la conducta que dio origen a la interposición de la presente acción de tutela, pues la accionada MINISTERIO DE DEFENSA dio respuesta a la solicitud elevada, la cual es de fondo, clara y congruente a lo requerido por el peticionario, pues hizo un pronunciamiento informando que el 23 de diciembre de 2023, resolvió la petición radicada por el accionante y a la cual le correspondió el radicado NO. RS20231223151919.

En la respuesta remitida al accionante, se observa que el MINISTERIO DE DEFENSA, le resolvió al accionante de forma individual las siete solicitudes contenidas en su petición del 20 de noviembre de 2023.

La notificación de dicha decisión, se remitió a los correos electrónicos autorizados por el accionante IVÁN ADOLFO SANTOS GUTIÉRREZ pedrocamilogonzalez@avancesesantias.com, ramonpaba@hotmail.com, y dr.ivansantos@yahoo.com el día 23 de diciembre de 2023.

De lo anterior se desprende que no es procedente afirmar que haya afectación de otros derechos fundamentales, toda vez que la vulneración de dichas garantías se debe analizar con fundamento en la existencia o no de una solicitud, en aras de establecer si la ausencia de respuesta por parte de la entidad produce trasgresión de derechos adicionales al de petición.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que la solicitud elevada ante el MINISTERIO DE DEFENSA ha sido resuelta íntegramente, este Despacho considera que la respuesta resuelve la cuestión planteada y bajo ese contexto, se negará el amparo deprecado al derecho fundamental de petición.

DECISIÓN:

² Corte Constitucional. Sentencia T-085 de 2018. Magistrado Ponente: Dr. Luis Guillermo Guerrero Perez.

EN MÉRITO DE LO ASÍ EXPUESTO, EL JUZGADO DIECISIETE DE FAMILIA DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C., ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA, POR AUTORIDAD DE LA LEY Y MANDATO CONSTITUCIONAL

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR LA TUTELA al derecho fundamental de petición por carencia actual de objeto por HECHO SUPERADO, impetrada por IVÁN ADOLFO SANTOS GUTIÉRREZ identificado con C.C. No. 80.418.461 contra el MINISTERIO DE DEFENSA, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

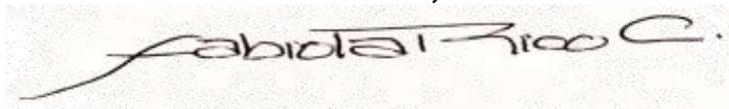
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a los interesados, por el medio más expedito posible (art. 30 Decreto 2591 de 1991).

TERCERO: La presente providencia podrá ser impugnada dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente decisión, envíese las presentes diligencias a la Corte Constitucional para eventual revisión, conforme a lo determinado en el inciso segundo del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

CUMPLASE

La Juez,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fabiola Rico C.', is written over a light-colored rectangular background.

FABIOLA RICO CONTRERAS